

su especialidad, puedan precisar tanto los pacientes hospitalizados como los que acuden al correspondiente Servicio de Urgencias.

c) Se entiende por «guardia de segunda localización» la situación de permanente localización de un funcionario médico de especialidad quirúrgica cuando existe otro facultativo de la misma especialidad en guardia de presencia física o localizada, con disponibilidad para acudir al centro, en cuanto sea requerido por aquel, para colaborar en la realización de intervenciones quirúrgicas que precisen del concurso de dos cirujanos de la misma especialidad.

La fijación de las especialidades que deban prestar asistencia sanitaria continuada de urgencias, la modalidad de las mismas, así como las condiciones específicas de su prestación (módulos de guardia, libranzas a que den derecho) corresponderá al Servicio Balear de la Salud que podrá, si así lo estima oportuno, delegarla expresamente a la Dirección Asistencial. Lo anteriormente expresado dará lugar al correspondiente «Acuerdo de Atención Sanitaria Continuada» que será negociado con los representantes sindicales en la Mesa Sectorial de Sanidad.

Artículo 5.- Destino y movilidad de los puestos de trabajo.

Como destino de los puestos de trabajo del Servicio Balear de la Salud, se establece el del Complejo Hospitalario de Mallorca que estará integrado, además de los Servicios Centrales, por los Hospitales «Juan March», «General» y «Psiquiátrico», así como cualquiera de los Centros de Salud que pertenezcan a su sector sanitario, de acuerdo con el contrato programa suscrito con el Instituto Nacional de la Salud.

La movilidad entre los distintos centros que configuran el Complejo Hospitalario estará basada, en todo caso, en criterios objetivos y necesidades asistenciales. Las condiciones de dicha movilidad deberán ser negociadas.

Disposición adicional.

A partir del año 1997, el complemento por productividad sanitaria compensada de los puestos de trabajo de personal funcionario del Servicio Balear de la Salud se verá disminuido, anualmente, en idéntica cuantía a la de los posibles aumentos retributivos que, desde dicha fecha, experimenten las retribuciones del personal estatutario al servicio del Instituto Nacional de la Salud, siempre que dichos aumentos no se deriven o sean consecuencia de los correspondientes incrementos vegetativos generales anuales fijados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Sin perjuicio de lo anterior, las cuantías de los posibles detrimentos del complemento de productividad sanitaria compensada se aplicarán a incrementar las cuantías del concepto retributivo que corresponda, de los regulados en el presente Decreto, todo ello previa negociación en la Mesa Sectorial de Sanidad; si no se llegase a un acuerdo respecto el destino de dichos incrementos, se aplicarán al concepto de productividad sanitaria fija.

Disposición transitoria.

Las Consejerías de Economía y Hacienda y de Función Pública e Interior adoptarán las medidas precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto sexto del Acuerdo de 27 de noviembre de 1996 respecto de las diferencias retributivas pendientes de abono del ejercicio presupuestario de 1996, correspondientes a conceptos retributivos que no se incluyeron en el artículo 1 del Decreto 210/1996, de 10 de diciembre.

Igualmente, por ambas Consejerías se adoptarán las medidas precisas para el abono de las diferencias retributivas que, por los conceptos retributivos no contemplados en el artículo 1 del Decreto 12/1997, de 23 de enero, pudieran corresponder a los funcionarios adscritos al SERBASA desde el 1 de enero de 1997 hasta la entrada en vigor del presente Decreto.

En todo caso, el abono de las cantidades resultantes se realizará previa la emisión, por el Servicio Balear de la Salud, de la correspondiente certificación en la que se determinen, de manera individual, los conceptos y cantidades a percibir por cada funcionario.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

En particular, se derogan: el Decreto 41/1987, de 9 de junio, por el que se regula la prestación de turnos de guardias médicas en el Hospital «Juan March» y el Decreto 72/1993, de 1 de Julio, relativo a determinadas retribuciones del personal funcionario del Hospital «Juan March».

Asimismo, se derogan: La Orden del Consejero de la Función Pública, de 21 de junio 1994, por la que se reestructuran las retribuciones de los funcionarios de los centros hospitalarios transferidos a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en virtud del Convenio con el Consejo Insular de Mallorca y el Decreto

12/1997, de 23 de enero, por el que se autoriza provisionalmente el abono de las retribuciones del personal funcionario adscrito al Servicio Balear de la Salud, por los conceptos retributivos y en las cuantías establecidas en el anexo del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 27 de noviembre de 1996.

Disposición final primera.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Disposición final segunda

En lo no dispuesto o regulado en este Decreto sobre retribuciones del personal funcionario del Servicio Balear de la Salud, se aplicará, supletoriamente, en cuanto sea subsumible en la especial naturaleza a que responde el sistema retributivo de los centros hospitalarios, el Decreto 85/1990, de 20 de septiembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios al Servicio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Disposición final tercera.

Se autoriza al Consejero competente en materia de Función Pública para dictar las correspondientes normas de desarrollo de lo dispuesto en el presente Decreto.

Palma, a 4 de julio de 1997

EL PRESIDENTE

Fdo.: Jaime Matas Palou

La Consejera de la Función Pública e Interior

Fdo.: María del Pilar Ferrer Vanrell

El Consejero de Economía y Hacienda

Fdo.: Antoni Rami Alós

El Consejero de Sanidad y Consumo

Fdo.: Francesc Fiol Amengual

(Ver anexo en versión catalana)

— o —

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

Núm. 14003

Decreto 92/1997 de 4 de julio de 1997, que regula el uso de la enseñanza de y en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares.

La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva, en armonía con los planes de estudios estatales, para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Así se dispone en el artículo 14 del Estatuto de autonomía, en el que también se establece que su normalización será un objetivo de los poderes públicos y que las modalidades insulares del catalán serán objeto de estudios y protección, sin perjuicio de la unidad del idioma.

En desarrollo del régimen de cooficialidad lingüística que dimana del artículo 3 del texto estatutario, y en consonancia con las determinaciones del artículo 14, la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Islas Baleares, proclama en el artículo 1.2 b, como uno de sus objetivos, asegurar el conocimiento y el uso progresivo del catalán como lengua vehicular en el ámbito de la enseñanza.

El título II de esta Ley dedica a la enseñanza una serie de preceptos que configuran un modelo educativo propio. Así, en el artículo 19, se establece que en todos los niveles, grados y modalidades de la enseñanza no universitaria deben enseñarse obligatoriamente la lengua y literatura catalanas, con atención especial a las aportaciones de las Islas Baleares.

El artículo 20 de la misma Ley afirma que deben adoptarse las disposiciones necesarias para garantizar, sin perjuicio del derecho reconocido en el artículo 18, que los escolares de las Islas Baleares puedan usar normalmente y correctamente la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y la lengua castellana al final del período de escolaridad obligatoria.

Se fija, también, que la Administración educativa ha de poner los medios necesarios para garantizar que los alumnos no sean separados en centros diferentes por razones de lengua y que se normalice progresivamente el uso de la lengua catalana como vehículo de expresión normal en los centros educativos.

La Orden del consejero de Cultura, Educación y Deportes, de 12 de agosto de 1994, sobre el uso de la lengua catalana, propia de esta Comunidad, como lengua vehicular en la enseñanza no universitaria, desarrolló la ordenación lingüística de la enseñanza. Esta Orden establece que el Proyecto lingüístico de centro debe garantizar que al finalizar la escolaridad obligatoria todos los alumnos tengan un dominio oral y escrito de la lengua catalana y de la castellana, debe determinar los principios pedagógicos en los que se basa la enseñanza de las lenguas en cada uno de los centros y debe prevenir la implantación progresiva de la lengua catalana en la enseñanza y en los actos administrativos, sociales y culturales del ámbito educativo.

Esta Orden motivó unos cambios positivos y considerables en aquellos centros escolares que, o bien hasta aquel momento no habían iniciado la enseñanza en lengua catalana, o bien se encontraban todavía en una fase retrasada en la implantación de este uso.

La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo (LOGSE) conjuga el principio de uniformidad, porque fija unas directrices comunes para las diferentes comunidades autónomas, y el de diversidad, porque confiere a cada comunidad, y por extensión a los diferentes centros, la responsabilidad de concretar y planificar aspectos curriculares.

Es en el marco de la autonomía que otorga el actual sistema educativo donde los centros pueden definir su proyecto educativo, que debe incluir el proyecto lingüístico. Muchos centros, sobretudo en los últimos años, han definido programas que prevén un uso normal de nuestra lengua. El resto de los centros, de acuerdo con las determinaciones de este Decreto, debe diseñar, también, un proyecto lingüístico que debe prever la implantación progresiva de la lengua catalana en la enseñanza y debe prestar especial atención a las modalidades insulares.

La situación actual, con la implantación de la LOGSE prácticamente consolidada, favorece el establecimiento de un marco normativo más ambicioso en relación a la enseñanza en lengua catalana. Este marco normativo deberá de fijar y unificar criterios en lo que se refiere al uso de la lengua propia de las Islas Baleares en el contexto escolar. Todo ello con la finalidad de avanzar en el proceso de normalización lingüística y de consolidar los principios establecidos en la Ley 3/1986, de 29 de abril, sin perder de vista el objetivo ineludible de conseguir que todos los escolares adquieran la debida competencia en las dos lenguas que son oficiales en la Comunidad Autónoma.

En consecuencia, el Decreto se ocupa de los mecanismos jurídicos y de planificación que han de posibilitar la implantación progresiva de la enseñanza en lengua catalana, establece pautas específicas para cada etapa educativa e incorpora una nueva regulación para la aprobación de material didáctico. Paralelamente, el Decreto prevé la proyección de nuestra lengua como vehículo normal de relación y comunicación en el ámbito docente.

De acuerdo con lo que dispone la conclusión segunda del dictamen número 39/97 del Consejo Consultivo, el Gobierno Balear ha procedido a corregir el error de hecho de la versión catalana del artículo 18.1 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de Normalización Lingüística, publicada en el BOCAIB nº 15, de 20-5-86, que no se incluyó en la corrección de errores publicada en el BOCAIB nº 16, de 30-5-86, para evitar que se prolongue y perpetúe una confusión y una discordancia, inexistentes en la voluntad emanada del Parlamento de las Islas Baleares. De esta manera, el artículo 18.1 de dicha Ley regula el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua, sea la catalana o la castellana.

Por todo ello, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el Consejo Consultivo, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de julio de 1997,

DECRETO

CAPÍTULO I

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y la lengua castellana, asignaturas obligatorias en la enseñanza no universitaria.

Artículo 1.

La lengua catalana, con especial atención a las modalidades de las Islas Baleares, y la literatura catalana, incidiendo en las aportaciones de las Islas, se enseñarán obligatoriamente, juntamente con la lengua y la literatura castellanas, en todos los niveles educativos y en todos los centros de la enseñanza no universitaria.

Artículo 2.

El número de horas de enseñanza de las asignaturas de lengua y literatura catalanas, propias de las Islas Baleares, será como mínimo igual al destinado a la

enseñanza de la lengua y literatura castellanas, de acuerdo con el artículo 19.2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, de normalización lingüística en las Islas Baleares.

Artículo 3.

La enseñanza de la lengua catalana ha de considerar las modalidades lingüísticas propias de las Islas Baleares, sin perjuicio de la unidad de la lengua, tal como prevé el artículo 14 del Estatuto de autonomía para las Islas Baleares.

Artículo 4.

La enseñanza de la lengua y la literatura catalanas se hará de acuerdo con los currículums establecidos para la normativa vigente.

Artículo 5.

Los alumnos que residan temporalmente en las Islas Baleares podrán solicitar la exención de la evaluación de la lengua y de la literatura catalanas, propia de las Islas Baleares, que podrá ser otorgada a propuesta de la Comisión Técnica de Asesoramiento para la Enseñanza de y en Lengua Catalana, de acuerdo con las disposiciones que desarrollan este Decreto. No obstante, en estos casos se deberá fomentar la asistencia a las clases. Esta regulación se establece sin perjuicio de otros supuestos de exención que pueda establecer la legislación educativa.

Artículo 6.

Los alumnos que de forma tardía se incorporen al sistema educativo de las Islas Baleares serán objeto de las adaptaciones curriculares que correspondan para adaptar la enseñanza de las áreas lingüísticas del currículum a sus conocimientos previos y a su nivel de aprendizaje.

CAPÍTULO II

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, lengua de enseñanza

Artículo 7.

La Administración educativa promoverá el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua vehicular de la enseñanza no universitaria, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 3/1986, de 29 de abril.

Artículo 8.

Los centros educativos planificarán la implantación progresiva de la enseñanza en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y lo especificarán en el Proyecto lingüístico de centro. Por esta razón, y a partir del curso posterior a la publicación de este Decreto, todos los centros educativos iniciarán, si corresponde, la enseñanza en esta lengua. Esta planificación ha de prever que, en un plazo de cuatro cursos escolares, el alumnado de la enseñanza no universitaria reciba la enseñanza según lo que se concreta en este Decreto y en las disposiciones que lo desarrollen.

Artículo 9.

Si, en el ejercicio del derecho relativo a la primera enseñanza que es reconocido en el artículo 18.2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, los padres o tutores solicitan que sus hijos no hagan un aprendizaje compartido en lengua catalana y en lengua castellana, el centro deberá de llevar a cabo las adaptaciones necesarias para satisfacer este derecho. Debe garantizarse, al mismo tiempo, el conocimiento de las dos lenguas oficiales, de acuerdo con lo que establece el artículo 20 de la Ley 3/1986, de 29 de abril.

Artículo 10.

El Proyecto lingüístico, inserto en el Proyecto educativo, será elaborado por el equipo directivo o por las personas docentes en las que delegue, que tendrán en cuenta las aportaciones del claustro de profesores y de los otros representantes de la comunidad educativa, y tendrá que ser aprobado por mayoría cualificada del consejo escolar del centro. Hasta llegar a la mitad del cómputo horario, el Proyecto lingüístico especificará qué áreas, además de las que se indican en este Decreto, se harán en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y cuáles en lengua castellana. Definirá, también, los planteamientos didácticos sobre los que se fundamenta la enseñanza de las lenguas y como se articula esta enseñanza, y determinará el uso que de ella se hará en el ámbito administrativo y en las comunicaciones.

Artículo 11.

Para modificar un proyecto lingüístico con la finalidad de superar el cómputo descrito en el artículo 10, el consejo escolar llevará a término las actuaciones necesarias para obtener el consenso mayoritario de los padres de los

alumnos a los que se pretende aplicar la modificación.

Artículo 12.

La Administración educativa evaluará la coherencia de los proyectos lingüísticos de los centros y su aplicación y efectividad, y hará el seguimiento de los resultados que se desprendan de su aplicación, con la finalidad de adoptar las medidas necesarias para evitar desequilibrios en el aprendizaje de las dos lenguas oficiales.

Artículo 13.

En el diseño del mapa escolar la Administración educativa tendrá en cuenta la coherencia y continuidad óptimas entre los proyectos lingüísticos de los centros de educación primaria y los de secundaria.

Artículo 14.

De acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley 3/1986, de 29 de abril, el profesorado que imparta la enseñanza en el ámbito de las Islas Baleares debe poseer el dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales necesarias en cada caso para las funciones educativas y docentes que ha de realizar, según la normativa que regule las titulaciones y los planes de reciclaje y de formación del profesorado. Su adscripción, en cada uno de los centros educativos, se hará de forma que favorezca la aplicación de los proyectos lingüísticos de los centros.

Artículo 15.

Las asignaturas de lengua y literatura catalanas y de lengua y literatura castellanas se harán en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y en lengua castellana, respectivamente. Las asignaturas de lengua extranjera se harán preferentemente en la lengua que se enseñe.

Artículo 16.

El uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza en la educación infantil, se regulará de la siguiente manera:

a) Dado el carácter globalizador de la educación infantil, no se especifica para las diferentes áreas la distribución horaria en cuanto a la enseñanza en cada una de las lenguas oficiales. Pero en todo caso, igualmente que en las etapas posteriores, en la educación infantil, el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de comunicación y de enseñanza, será como mínimo igual al de la lengua castellana, con la finalidad de que, al acabar esta etapa, el alumnado tenga una competencia en lengua catalana que le permita comunicarse normalmente en esta lengua con los otros alumnos y con el profesorado, en las comunicaciones propias de esta etapa en el marco escolar, y debe estar preparado para que, al iniciar la educación primaria, independientemente de cual sea la lengua familiar, pueda seguir las materias de la educación primaria en lengua catalana o en lengua castellana.

b) Hasta llegar a la mitad del cómputo horario, en el proyecto lingüístico de centro, que ha de ser aprobado por la mayoría cualificada del consejo escolar, debe describirse la planificación prevista en relación al uso de la lengua catalana y de la lengua castellana en los diferentes niveles de la educación infantil.

c) En la educación infantil se usará preferentemente la variedad dialectal propia del entorno de aprendizaje.

Artículo 17.

El uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza en la educación primaria, se regulará de la siguiente manera:

a) En la educación primaria, el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza de las diferentes áreas, será como mínimo igual al de la lengua castellana.

b) En todo caso, los alumnos, al acabar esta etapa, deben tener una competencia en lengua catalana y en lengua castellana que les permita comunicarse normalmente en cada una de estas lenguas con los otros alumnos y con el profesorado, en las comunicaciones propias de esta etapa en el marco escolar.

c) En la educación primaria se impartirá el área de conocimiento del medio natural, social y cultural en lengua catalana. De entre las otras áreas, y hasta llegar a la mitad del cómputo horario, se concretarán en el Proyecto lingüístico, que deberá que ser aprobado por mayoría cualificada del consejo escolar del centro, qué áreas se enseñaran en la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y cuáles en la lengua castellana.

d) En la educación primaria se utilizará preferentemente la lengua catalana oral propia del entorno de aprendizaje y se introducirá al alumno de forma

progresiva, y sobretodo en el lenguaje escrito, en el conocimiento de la variedad estándar más propia del ámbito de las Islas Baleares. Así, debe garantizarse que al final de esta etapa el alumnado tenga un conocimiento global y armónico de la lengua catalana y de la castellana.

Artículo 18.

El uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza en la educación secundaria obligatoria, se regulará de la siguiente manera:

a) En la educación secundaria obligatoria se impartirán en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, el área de ciencias sociales, geografía e historia y el área de ciencias de la naturaleza. Esta implantación se hará de forma progresiva y de acuerdo con el artículo 8 de este Decreto.

b) De entre las otras áreas, y hasta llegar a la mitad del cómputo horario, se concretarán en el Proyecto lingüístico, que deberá que ser aprobado por mayoría cualificada del consejo escolar del centro, qué áreas y en qué grupos y niveles se enseñarán en lengua catalana.

c) Al final de esta etapa, y de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de normalización lingüística en cuanto al dominio de la lengua que se debe haber logrado al final del período de escolarización obligatoria, los alumnos han de poder utilizar normalmente y correctamente la lengua catalana y la lengua castellana.

Artículo 19.

El uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de enseñanza en la educación secundaria postobligatoria, se regulará de la siguiente manera:

a) En lo que se refiere a la educación postobligatoria, mediante las disposiciones necesarias se concretarán qué asignaturas deben hacerse en lengua catalana en el momento en que se generalice el proceso de implantación de la LOGSE y, sobre todo, cuando los alumnos que accedan a esta etapa hayan hecho en catalán, a lo largo de la educación secundaria obligatoria, las asignaturas que se indican en el artículo 18 de este Decreto. En este momento, el uso de la lengua catalana será, como mínimo, igual al de la lengua castellana.

b) Entre tanto, los centros iniciarán de forma gradual y progresiva la enseñanza en esta lengua. La planificación de cada centro, que se reflejará en el Proyecto lingüístico, se hará en coherencia con las áreas que los alumnos habrán hecho en lengua catalana a lo largo de la etapa anterior y al mismo tiempo se priorizará hacer en esta lengua aquellas asignaturas que mejor pueden incidir en los estudios posteriores y en la inserción en el mundo social y laboral.

CAPÍTULO III

La lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua de relación y de comunicación en el ámbito docente.

Artículo 20.

La Administración educativa y los centros de enseñanza no universitaria usarán progresivamente la lengua propia de esta Comunidad en las relaciones mutuas, en las que mantengan con las administraciones territoriales y con las otras entidades públicas y privadas de las Islas Baleares.

Artículo 21.

Se fomentará el uso de la lengua catalana en los actos culturales que el centro organice y en las actividades complementarias que se ofrezcan a los alumnos.

Artículo 22.

Las actuaciones administrativas de régimen interno de los centros docentes, como son actas, comunicados y anuncios, se redactarán en lengua catalana. En los procedimientos administrativos se utilizará la lengua catalana o la castellana de acuerdo con la legislación vigente.

CAPÍTULO IV

Libros de texto de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria.

Artículo 23.

Los proyectos editoriales en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, que deban de servir de base para editar materiales curriculares destinados a ser

utilizados por el alumnado de los centros docentes públicos y privados de enseñanza no universitaria, deberán ser autorizados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. La aprobación de los proyectos editoriales implicará la autorización de los libros de texto o de otros materiales que los desarrollen. Los proyectos editoriales deben respetar las modalidades insulares de la lengua catalana.

Artículo 24.

Son materiales curriculares los libros de texto u otros materiales editados que el profesorado y el alumnado utiliza en los centros docentes, públicos y privados, para el desarrollo y aplicación del currículum de la LOGSE.

Artículo 25.

Los centros docentes no podrán adoptar como libros de texto aquellos materiales que no estén autorizados por la Consejería. Asimismo, los otros materiales que se utilicen en los centros deberán adecuarse a los currículos establecidos. No requerirán autorización los materiales editados que se utilicen en las aulas como material de apoyo que no estén destinados de manera específica al desarrollo de una determinada área o materia del currículum. Se autorizarán como libros de texto los que se adapten al currículum del área y, si corresponde, deberán tener presentes las peculiaridades sociales, geográficas y culturales que configuran la identidad de las Islas Baleares.

Artículo 26.

Las empresas editoriales remitirán sus proyectos para su aprobación a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Artículo 27.

Los materiales que se editen y que se pongan al alcance del alumnado y del profesorado deberán atenderse al proyecto editorial aprobado. en caso contrario, la Consejería los podrá desautorizar.

Disposición adicional primera.

No será de aplicación el artículo 11 de este Decreto en aquellos centros que, en el momento de su publicación, ya hayan iniciado o consolidado el proceso de enseñanza en lengua catalana, propia de las Islas Baleares, y hayan superado el cómputo descrito en este artículo, de acuerdo con el Proyecto lingüístico aprobado en su momento.

Disposición adicional segunda.

Excepcionalmente, los centros de educación primaria y/o secundaria podrán solicitar a la Administración Educativa hacer en lengua catalana un área diferente a la que se fija en los artículos 17c y 18a, respectivamente, siempre que se justifique adecuadamente en el Proyecto lingüístico.

Disposición adicional tercera.

La Comisión Técnica de Asesoramiento para la Enseñanza de y en Lengua Catalana será el órgano consultivo del Consejero de Educación, Cultura y Deportes y emitirá su parecer cuando lo solicite, en aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de la lengua catalana en los centros docentes no universitarios.

Disposición transitoria

En los términos que se prevean reglamentariamente, podrá retrasarse excepcionalmente la aplicación de los artículos 8, 10, 16, 17, 18 y 19 de este Decreto en aquellos centros cuyo profesorado no reúna las condiciones de adscripción de acuerdo con el que dispone el artículo 14.

Disposición derogatoria

1. Quedan derogadas las normas de rango igual o inferior que contradigan o que se opongan al que dispone este Decreto.

2. Quedan derogadas en la totalidad las disposiciones siguientes:

a) El Decreto 74/1986, de día 28 de agosto, regulador de la enseñanza de la lengua y literatura catalanas en los centros docentes no universitarios de las Baleares.

b) La Orden del Consejero de Educación y Cultura, de día 29 de agosto de 1986, de regulación de la enseñanza en lengua catalana en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares.

c) El Decreto 82/1986, de 18 de septiembre, de modificación del Decreto 74/

1986, de 28 de agosto, regulador de la enseñanza de la lengua o literatura catalanas en los centros docentes no universitarios de las Baleares.

d) La Orden de la consejera de Cultura, Educación y Deportes, por la que se modifica el artículo 3 de la Orden del consejero de Educación y Cultura, de día 29 de agosto de 1986, de regulación de la enseñanza en lengua catalana en los centros docentes no universitarios de las Islas Baleares.

e) La Orden del consejero de Cultura, Educación y Deportes, de día 12 de agosto de 1994, sobre el uso de la lengua catalana, propia de las Islas Baleares, como lengua vehicular en la enseñanza no universitaria.

f) La Orden del consejero de Educación y Cultura, de día 29 de agosto de 1986, de regulación de las exenciones del aprendizaje de la lengua catalana.

g) La Orden del consejero de Educación y Cultura, de día 29 de agosto de 1986, por la que se regula la aprobación de los textos y el material pedagógico de la lengua catalana, como también las versiones en lengua catalana del resto de libros de texto para todos los niveles, los grados y las modalidades de la enseñanza no universitaria regulada por la Ley 3/1986, de día 29 de abril, de normalización lingüística.

Disposición final primera

Se faculta al consejero de Educación, Cultura y Deportes para dictar las disposiciones de aplicación y de desarrollo de este Decreto.

Disposición final segunda

Este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el B.O.C.A.I.B

Palma, 4 de julio de 1997

EL PRESIDENTE,

Jaime Matas Palo

Consejero de Educación, Cultura y Deportes

Manuel Ferrer Massanet

— o —

CONSELLERIA DE TURISMO

Núm. 13928

Decreto 90/1997, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, que regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.

El Decreto 112/1996, de 21 de junio, que regula la profesión de guía turístico en nuestra Comunidad Autónoma, incluye en su articulado la alusión a un futuro catálogo de lugares en los que es preceptivo la asistencia de guía turístico. Transcurridos unos meses de vigencia del Decreto, parece conveniente para mayor claridad, que se especifique en el texto del Decreto el conjunto de lugares en los que es preceptiva la asistencia de guía, por otra parte, la experiencia, aconseja también efectuar una pequeña modificación en la normativa, tras consulta a las asociaciones profesionales con interés en este tema.

Por ello y en uso de las facultades que confieren el artículo 10.9 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares y el Decreto 3.401/1983, de 23 de noviembre, a propuesta del Consejero de Turismo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 4 de julio de 1997,

DECRETO

Artículo.1.

1. Se modifica el art. 2 del Decreto 112/1996, que queda de la siguiente forma:

“La profesión de guía turístico consiste en la actividad realizada por quienes se dedican, con carácter habitual y retribuido, a la prestación de servicios de información, orientación y/o asistencia a grupos de personas durante las excursiones programadas a los siguientes lugares:

a) Museos, cuevas y yacimientos arqueológicos.

b) Iglesias, conventos, santuarios i monasterios.

c) Monumentos y castillos declarados Bienes de Interés Cultural.

d) Resto de Bienes de Interés Cultural, que se visiten con esa finalidad.